



5. VIEJOS Y NUEVOS MILITARISMOS

El complejo militar-industrial está cambiando la UE

Apostolis Fotiadis

■ Con la eurozona en crisis permanente, el *brexit* en el horizonte y sendos partidos de extrema derecha en ascenso desde Alemania hasta la República Checa, el futuro de la Unión Europea nunca ha parecido estar tan en entredicho. No hay escasez de líderes que aspiran a relanzar el proyecto de unificación que ha ayudado a las poblaciones europeas a dejar atrás los horrores de dos guerras mundiales. Pero tanto si es el federalista de viejo estilo y presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, como la sólida canciller alemana Angela Merkel o el inconformista presidente francés Emmanuel Macron quien dirige el debate sobre el futuro de Europa, hay un tema recurrente que encabeza la lista de prioridades: la defensa.

En su ambicioso discurso sobre el futuro de Europa que pronunció en septiembre en la Universidad de la Sorbona, Macron expresó su gran visión: “Al comienzo del próximo decenio, Europa ha de contar

3. PLURAL

con una fuerza de intervención conjunta, un presupuesto de defensa común y una doctrina conjunta para la acción”. No se trata de una mera lista de deseos políticos: tanto los planes de financiación como la infraestructura institucional para la consolidación de esa misma política militar europea se están creando a una velocidad sorprendente. Miles de millones de euros se han puesto sobre la mesa para proyectos de investigación y desarrollo y la compra de armas; sobre el papel, y a punto de ponerse en práctica, hay planes para militarizar la ayuda al desarrollo, evitar restricciones constitucionales y destinar fuerzas europeas a los campos de batalla. Los Estados miembros de la UE se reunirán el lunes en Bruselas ^{1/} para firmar un pacto de defensa –Cooperación Estructurada Permanente o PESCO– que preconiza un aumento masivo de la inversión militar y pretende allanar el camino al despliegue de fuerzas europeas.

La mayoría de la población europea no tiene noticia de estas maquinaciones; en la situación de pánico, ahora ya casi rutinaria, generada por los sucesivos ataques terroristas y las declaraciones de estado de emergencia por parte de los Estados miembros, las voces críticas son demasiado marginales para ser escuchadas. La alianza en ciernes entre los políticos y la industria militar europea recuerda la advertencia del presidente Eisenhower de hace casi sesenta años: “Hemos de prevenir contra la adquisición de una influencia indebida, deseada o no, por parte del complejo militar-industrial. El potencial de ascenso desastroso de un poder ilegítimo existe y persistirá”.

En su emotivo discurso sobre el estado de la Unión de septiembre de 2016, Juncker habló de las amenazas existenciales a que se enfrenta el *modo de vida* europeo. En un mundo hostil, dijo, Europa tendrá que adaptarse; el poder blando ya no basta para hacer frente a las amenazas modernas: “Para que la defensa europea sea fuerte es preciso que la industria de defensa europea innove. De ahí que propondremos, antes de finales de año, un Fondo Europeo de Defensa para dar un buen impulso a la investigación y la innovación”.

La primera que se sintió estimulada por las declaraciones de Juncker fue la comisaria de Industria, Elzbieta Bienkowska, quien tuiteó al instante: “¡Buenas noticias para la industria de defensa: nuevo Fondo Europeo de Defensa antes de final de año!”. Un año y medio antes, en marzo de 2015, Bienkowska había puesto en marcha un grupo de personalidades de alto nivel para asesorar a la Comisión Europea sobre el modo de apoyar y promover la investigación en materia militar y de seguridad, formado por peces gordos de los despachos de la industria y de la Comisión. Estaban invitados los directores generales de los principales contratistas militares europeos, entre ellos Indra, Saab, Airbus

Group, BAE Systems y Finmeccanica (rebautizada después con el nombre de Leonardo), además

1/ <https://www.thenation.com/article/the-military-industrial-complex-is-fundamentally-changing-the-european-union/>

de representantes de institutos de estudios y personalidades políticas como el ex primer ministro sueco y euroatlantista Carl Bildt y el eurodiputado alemán Michael Gahler.

Como era de esperar, la propuesta del grupo, remitida en febrero de 2016 al Instituto de Estudios de Seguridad de la UE, situó a la industria y a sus interlocutores favoritos en la primera línea de la elaboración de la política europea de defensa, recomendando la creación de una nueva línea de investigación militar en el siguiente presupuesto de la UE, así como de un grupo asesor específico para apoyar “la planificación conjunta de la industria (el proveedor final) y los Estados miembros (los clientes de confianza)”. Se recomendó a la Comisión que consultara a organizaciones “como la Asociación de Industrias Aeroespaciales y de Defensa de Europa (ASD)”, que “puede aportar valiosos consejos para la selección de representantes de los sectores interesados”.

“La ASD es la principal red que representa los intereses de los gigantes de la industria militar”

La ASD es la principal red que representa los intereses de los gigantes de la industria militar, o lo que la gente de Bruselas llamaría más sencillamente un grupo de presión. Entre sus miembros figuran algunos de los

mismos contratistas cuyos directores generales formaban parte del grupo de alto nivel de Bienkowska, así como asociaciones nacionales que representan sus intereses empresariales. En esencia, los representantes del sector industrial, junto con los expertos y políticos asociados, aconsejaron que la Comisión se apoyara en ellos de cara a las innovaciones de la política militar, de la que a fin de cuentas ellos serían los principales beneficiarios.

No hay nada nuevo en el modo en que la UE utiliza fondos de investigación extraordinarios en apoyo de sus políticas que benefician a la industria militar. Hace trece años, la Comisión llevó a cabo un procedimiento muy similar en relación con la seguridad interior, cuando otro grupo de alto nivel (con casi la misma composición que el de Bienkowska) presentó el informe “Investigación para una Europa segura”, poniendo en marcha un proceso idéntico. Lo que comenzó como un programa piloto de investigación más bien marginal, acabó inyectando 3.500 millones de euros en el presupuesto de la UE para la adquisición directa de dispositivos biométricos, equipos de vigilancia y otros artículos de seguridad. Un informe encargado en 2014 por la comisión del Parlamento Europeo encargada de la vigilancia de las libertades civiles, LIBE, criticó duramente los foros de alto nivel que definen la política de seguridad y defensa a modo de “comunidad cerrada en proceso de formación, interesada en el desarrollo de enormes márgenes de

3. PLURAL

beneficios para la industria”. Avisó de que “la investigación financiada en materia de seguridad estará en el futuro al servicio principalmente de la industria y no de la sociedad”.

Sin embargo, la eurodiputada Bodil Valero, portavoz sueca de seguridad y defensa de Los Verdes/ALE, señala que influyen más ciertos planteamientos políticos que los intereses de la industria en la promoción de la militarización de la UE: “Una mayoría de eurodiputados y otras personas aquí actúan por miedo y por el deseo de hallar una solución rápida a lo que, desde mi punto de vista, son profundos problemas de seguridad estructurales –dice–. Hay asociaciones que promueven el uso del presupuesto de la UE para fines de defensa y un incremento general del gasto militar de los Estados miembros. En todo caso, ha sido más el estallido de la guerra en el este de Ucrania y la anexión ilegal de

Crimea, además de los atentados terroristas del Estado Islámico en varias ciudades europeas, lo que ha hecho posible esta evolución”.

“EE UU ha impulsado con entusiasmo el proceso de militarización”

Los vídeos de las reuniones de la subcomisión de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo muestran

a menudo a un grupo de eurodiputados aburridos escuchando a expertos en cuestiones militares y de seguridad o a analistas geopolíticos que describen un mundo de tipo Mad Max más allá de las fronteras de la UE. Sin embargo, cuando hay debate, suele girar en torno a las amenazas existenciales para el modo de vida europeo: el terrorismo islámico, el aislacionismo trumpiano y, especialmente para los eurodiputados de Europa Oriental, los planes agresivos del presidente ruso, Vladimir Putin, y su guerra de propaganda contra la UE. Los hechos objetivos no parecen influir gran cosa a la hora de calibrar la magnitud de la amenaza militar para Europa procedente del este. El Instituto Europeo de Estudios de Seguridad ha informado que en 2016 los 28 Estados miembros de la UE invirtieron nada menos que 206.000 millones de euros en defensa. Francia por sí sola se gastó 43.000 millones de euros, superando a Rusia con sus 42.000 millones.

EE UU ha impulsado con entusiasmo el proceso de militarización, presionando a sus aliados europeos, en la cumbre de la OTAN de 2016, para que dediquen el 2% de sus presupuestos a la defensa, un compromiso a largo plazo que de momento no se ha cumplido mayoritariamente. Los Ministerios de Defensa de Alemania y Francia se apresuraron a responder positivamente al llamamiento presentando su plan de acción bilateral ante la UE el 11 de septiembre de 2016. Merkel y Macron parecen deseosos de cultivar la impresión de que su impulso a una rápida militarización responde a un plan común. En realidad, las

industrias militares de ambos países compiten ferozmente por los mercados y sus motivos políticos también divergen. Para Alemania, cuya industria armamentística va relativamente a la zaga, la europeización permitiría salvar la desconfianza que podría suscitar una expansión militar exclusivamente alemana. Para Francia, la iniciativa conjunta es otro intento de debilitar la hegemonía alemana tras la incapacidad de la eurozona para ponerle coto.

El Parlamento Europeo no siempre ha sido un territorio amigo para el complejo militar-industrial emergente. Ben Hayes, experto británico en política de seguridad europea y autor de sendos informes pioneros para Statewatch y el Instituto Transnacional, recuerda que la industria y la Comisión Europea se toparon con una oposición significativa en el Parlamento Europeo al intentar instituir una política de seguridad europea en el decenio posterior a 2004. “Las críticas de los eurodiputados en las comisiones fueron a menudo muy duras, y diversos megaproyectos de vigilancia impulsados por la Comisión, como el registro de los nombres de los pasajeros y la *frontera inteligente*, permanecieron durante años sobre la mesa de negociación hasta obtener el visto bueno político”, recuerda.

No es probable que la transición de la política de seguridad blanda a la militarización pura y dura actualmente en curso tarde tanto tiempo en realizarse. Los diputados preocupados por las ambiciones militares rusas o las amenazas híbridas a la seguridad como los ciberataques han convertido el Parlamento Europeo en un foro mucho más favorable a tales iniciativas. Para quienes han estado promoviendo la militarización todo este tiempo, como el siempre presente democristiano Michael Gahler, las perspectivas nunca han sido más halagüeñas. A finales del año pasado, Gahler recordó a sus colegas que “aprovechar el impulso en materia de seguridad y políticas de defensa tras el referéndum del *brexit* y la elección del señor Trump en EE UU es crucial para avanzar”, y propuso el relanzamiento de la PESCO, un mecanismo conocido entre los funcionarios de la UE como “la bella durmiente del Tratado de Lisboa”, que permitiría involucrar directamente a fuerzas europeas en operaciones militares.

Más o menos en la misma época en que el grupo de alto nivel de Bienkowska se disponía a ultimar su trabajo, también estaban elaborándose dos informes separados sobre la política militar europea, uno iniciado por el eurodiputado estonio y exministro de Asuntos Exteriores, Urmas Paet, y el otro escrito por Ioan Mircea Pascu, socialdemócrata rumano y vicepresidente del Parlamento Europeo. Ambos reprodujeron las conclusiones fundamentales del informe del Grupo de Bienkowska; ambos fueron aprobados por el pleno del Parlamento Europeo, el de Paet el 22 de noviembre del año pasado y el de Pascu el 23. Sus amplias propuestas incluían la creación de un nuevo instrumento financiero de apoyo a la investigación militar en la UE, estableciendo una plataforma para ayudar al ejecutivo de la UE a coordinar los imperativos políticos y las necesidades industriales y un nuevo Consejo

3. PLURAL

Europeo de ministros de Defensa, y el desarrollo de la capacidad de la UE para desplegar fuerzas armadas en zonas de crisis.

Juncker no tardó mucho en presentar planes concretos para la nueva política; de hecho, apenas una semana. El 30 de noviembre, en un comunicado de prensa no muy difundido, anunció el Plan de Acción Europeo de Defensa (EDAP) de la Comisión, que era algo más ambicioso que el planteado en los tres informes: ponía dinero contante y sonante sobre la mesa. Un fondo de nueva creación, que deberá ponerse en marcha a partir de 2020, se dotará de 500 millones de euros al año para financiar actividades de investigación y desarrollo y prevé un flujo financiero paralelo de 5.000 millones al año, fundamentalmente para la adquisición de material militar a través de grupos de Estados miembros. El importe total se acerca a 39.000 millones de euros, procedentes en parte de fuentes europeas y en parte de aportaciones de los Estados miembros, que –a modo de incentivo adicional para que estos gasten más– podrían quedar excluidos de las normas de equilibrio presupuestario de la UE. Siete años antes, en el apogeo de la crisis de la deuda, Grecia había solicitado ese mismo enfoque flexible, solo para recibir un rotundo no por respuesta.

Una de las pocas voces discordantes de este plan ambicioso fue la de Laetitia Sedou, responsable del programa de la Red Europea Contra el Comercio de Armas, un modesto grupo que coordina a organizaciones europeas contrarias a la militarización. Antes de la celebración del 60 aniversario de la UE en Roma, el pasado mes de marzo, escribió al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, a Juncker y a los jefes de Estado europeos para reclamar que Europa “siga siendo un club pacífico de naciones en vez de contribuir a una nueva carrera de armamentos”.

La carta de Sedou describe la militarización generalizada de todos los aspectos del presupuesto de la UE. Además de los miles de millones de euros que el EDAP proponía inyectar directamente en las arcas de la industria militar, escribió, la UE pretendía facilitar el acceso de fabricantes de armas a una serie de oportunidades de financiación europea, incluidos los fondos estructurales, la ayuda al desarrollo destinada a aliviar la pobreza e incluso Erasmus, el programa europeo de educación y formación: “En enero de 2017, una convocatoria de ofertas lanzada al amparo de Erasmus incluye la defensa como una de las seis áreas prioritarias”. Incluso sin el desvío de subsidios reservados para fines pacíficos, si se mantienen las proyecciones presupuestarias de Juncker, la asignación directa de fondos de la UE a contratistas militares y sus filiales de seguridad nacional habrá aumentado de cero en 2004 a decenas de miles de millones de euros de aquí a 2020.

La creación de un complejo militar-industrial está asociada, tanto entre euroescépticos como a los ojos de interlocutores críticos favorables a la UE, a la posible creación de un ejército de la UE, un sueño para diversos políticos europeos. Sin embargo, Sedou lo ve más como

un intento de aprovechar una capacidad industrial no utilizada. “Una UE de defensa es un proceso político –dice–, pero lo que propone la Comisión Europea es un puro proceso industrial”.

El propio Juncker parece pensar lo contrario. En marzo de 2015 declaró al periódico alemán *Welt am Sonntag* que “un ejército conjunto de la UE mostraría al mundo que nunca más habrá una guerra entre países europeos. Este ejército también nos ayudaría a configurar una política exterior y de seguridad común y permitiría a Europa asumir su responsabilidad en el mundo”. Fuentes de la Comisión Europea han admitido que la posibilidad de desplegar fuerzas armadas de la UE es una prioridad política. Y una vez creada la capacidad para financiar y desplegar estas fuerzas europeas, seguramente no se tardará mucho en encontrar un pretexto para enviarlas al campo de batalla.

A mediados de mayo, el ministro de Interior alemán, Thomas de Maizière, y su homólogo italiano, Marco Minniti, ya reclamaron el establecimiento “a la mayor brevedad posible” de una misión entre Libia y Níger para llevar a cabo lo que la política de la UE ha sido incapaz de conseguir en el Mediterráneo central: impedir que refugiados y migrantes lle-

“... la posibilidad de desplegar fuerzas armadas de la UE es una prioridad política”

guyen a Europa. El 30 de octubre, la comisaria de Asuntos Exteriores de la UE, Federica Mogherini, señaló que había la posibilidad de desplegar grupos de combate conjuntos de la UE, compuesto cada uno de 1.500 soldados, en misiones de Naciones Unidas en África. Estos grupos de combate podrían participar en las

nuevas misiones de Naciones Unidas solicitadas por varios países miembros de la UE para combatir la amenaza de terrorismo en el Sahel y a las redes de contrabando que se aprovechan allí de la creciente inseguridad. Si se confirma, sería la primera vez que una fuerza militar conjunta de la UE entre en acción en algún lugar del mundo.

El surgimiento de un complejo militar-industrial, junto con las ocasiones para la UE de entrar en guerra, tendrá inevitablemente un efecto profundo en el futuro de la Unión. En palabras de Bodil Valero, “como eurodiputada de un Estado miembro de la UE que no pertenece a la OTAN, he de decir que no quiero que la UE se convierta en una alianza militar encargada de la defensa del territorio. Esto alteraría profundamente la naturaleza de la Unión”.

Apostolis Fotiadis es periodista residente en Atenas

10/11/2017

Traducción: **viento sur**